

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: 1341/2018

ACTOR: ***

AUTORIDAD DEMANDADA: SECRETARÍA DE
FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Aguascalientes, veinticinco de enero de
dos mil diecinueve.

V I S T O S para resolver, los autos del juicio de nulidad
número 1341/2018

RESULTANDO:

I. Mediante escrito presentado el *veintinueve de agosto de
dos mil dieciocho* en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado,
remitido a esta Sala al día hábil siguiente, la c *** , demandó de las
autoridades al rubro citadas la nulidad del acto administrativo que
precisó en los siguientes términos:

***“II.- RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
QUE SE IMPUGNA;***

*La nulidad de la determinación que contiene el requerimiento de
pago a la propiedad raíz, número ..., con clave ***, de la cuenta catastral ***,
de la cuenta depto. ***, de ***, emitida por la Secretaria de Finanzas del Estado de
Aguascalientes, el cual determina la cantidad total de \$ 847.00 (mil ochocientos
cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de impuesto a la propiedad raíz,
recargos, actualizaciones, multas, diligencia de embargo y demás contenidos la
determinación que se impugna, correspondiente al inmueble ubicado en el
artículo 27 número 220 del fraccionamiento constitución, correspondiente al año
2018.”*

II. El *siete de septiembre de dos mil dieciocho*, se admitió a
trámite la demanda, se recibieron las pruebas ofrecidas y ordenó
emplazar a las autoridades demandadas.

III. Por acuerdo del *diecinueve de octubre de dos mil
dieciocho*, se recibió la contestación de demanda, admitiendo las
pruebas en términos de dicho auto y se ordenó correr traslado a la
actora para ampliación de su demanda.

IV. Mediante proveído de *siete de noviembre de dos mil dieciocho*, se tuvo al acto manifestando que era su voluntad no formular ampliación de demanda, por lo que fue señalada fecha para la audiencia de juicio.

V. En audiencia de juicio que fue celebrada el *quince de enero de dos mil diecinueve*, se desahogaron las pruebas admitidas a las partes, se agotó el periodo de alegatos y se citó el asunto para dictar sentencia definitiva, que hoy se pronuncia:

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, es **competente** para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, párrafo segundo y 52, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 33-A y 33-F, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el Estado y artículos 1º y 2º, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, en virtud de que se impugna una resolución definitiva dictada por una autoridad fiscal del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, que la actora afirma, le afecta su esfera jurídica.

SEGUNDO.- Precisión del acto impugnado.

Con fundamento en el artículo 60, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes¹, y a fin de fijar con exactitud la cuestión a resolver, se precisa que el acto impugnado en el presente juicio es la determinación contenida en el Requerimiento de Pago del Impuesto a la Propiedad Raíz para el ejercicio fiscal 2018, relativo a la cuenta predial **, emitido el *treinta y uno de julio de dos mil dieciocho*, por la Jefa del Departamento de Impuestos Predial e ISABI, de la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes bajo el número

Prueba que fue acompañada al escrito de demanda, siendo una DOCUMENTAL PÚBLICA que al haberse expedido por

¹ “**ARTICULO 60.-** Las sentencias que dicte la Sala no necesitarán formulismo alguno, pero deberán contener:

I.- **La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos**, así como el examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;...”



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

servidor público en ejercicio de sus funciones, merece pleno valor probatorio de conformidad al artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, por disposición de sus numerales 3º y 47.

TERCERO.- En virtud de que no se advierte causal de improcedencia alguna, se procede a estudiar los conceptos de nulidad que hace valer la parte accionante, los que por economía procesal no se transcriben, aunado a que no es un requisito formal de las sentencias.²

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la parte demandada, sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.

CUARTO.- ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD

Expresa la actora en el ÚNICO concepto de nulidad, que de la simple apreciación de la determinación del crédito fiscal, se observa que la firma que lo calza no es autógrafa, sino que se trata de una firma facsimilar, o bien se trata de una firma en fotocopia que está impresa en la determinación que se impugna, por lo que dicha resolución contraviene lo establecido por el artículo 4º, fracción IV de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

El argumento es FUNDADO, toda vez que la demandada Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de

² Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la novena época, localizable con número de registro: 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro señala: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”**

Aguascalientes no demostró que la resolución impugnada haya sido emitida con firma autógrafa.

Es así porque es a la *demandada* a quien corresponde la carga de la prueba para acreditar la existencia de firma autógrafa, *sin que hubiere ofrecido prueba para acreditar tales extremos*; lo anterior en términos de la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, con el número de tesis 2a./J. 3/2012 (10a.), cuyo rubro y texto establece lo siguiente:

“FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE AQUÉL SÍ LA CONTIENE. La manifestación del actor en un juicio de nulidad en el sentido de que el acto administrativo impugnado carece de firma autógrafa de la autoridad que lo emitió, no es apta para estimar que a él le corresponde la carga de la prueba, ya que no se trata de una afirmación sobre hechos propios. Ahora bien, si la autoridad en la contestación a la demanda manifiesta que el acto sí calza firma autógrafa, ello constituye una afirmación sobre hechos propios que la obliga a demostrarlos; además, es importante destacar *que el juzgador no está en condiciones de apreciar a simple vista si la firma que calza el documento es autógrafa o no, toda vez que no posee los conocimientos técnicos especializados para ello, dado que la comprobación de ese hecho requiere de la prueba pericial grafocópica que ofrezca la demandada.*”

Luego, si la autoridad demandada dejó de ofrecer prueba alguna para acreditar que la resolución impugnada sí contiene firma autógrafa; esta Sala se encuentra impedida para analizar a simple vista si la firma que calza la resolución impugnada es autógrafa en términos de la jurisprudencia antes señalada; y por ende, se presume que la firma que calza la resolución combatida no es autógrafa incumpliendo ello con el requisito previsto en el 4, fracción IV, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, establece:

“Artículo 4º.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:

I.-...

IV.- *Constar por escrito y con la firma autógrafa de la*



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición, y siempre y cuando la naturaleza del acto requiera una forma distinta de manifestación;...”

Es así, porque si bien, los actos administrativos tienen una presunción de legalidad de conformidad con el artículo 6º de la Ley del Procedimiento Administrativo, lo cierto es que la omisión de la autoridad de acreditar que la firma que contienen los actos combatidos es autógrafa, destruye dicha presunción de legalidad y en consecuencia debe darse por sentado que las resoluciones impugnadas carecen de validez, pues no existe evidencia de que realmente se hubieren emitido o de que esa hubiere sido la voluntad de la autoridad.

Lo anterior, para evitar, como ya se ha dicho, que la parte actora se vea afectada en su esfera jurídica, ante la omisión de la autoridad demandada de probar su dicho, aún cuando tenía la inexorable obligación de hacerlo rompiendo así, la indefinición derivada de la omisión en que incurrió la demandada.

Por lo tanto, al no contar con firma autógrafa la resolución impugnada por parte del funcionario emisor, lo procedente es que se declare la **NULIDAD LISA Y LLANA**, en términos de los artículos 61, fracción II y 62, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes; en virtud de que al carecer de firma estampada de puño y letra de la autoridad administrativa, en contravención a lo dispuesto por el artículo 4, fracción IV, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, pues es un acto de molestia que no cumple con los requisitos establecidos en dicho numeral.

Sirve de apoyo a lo antes expuesto el siguiente criterio emitido por Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, Enero de 2001, Tesis: I.9o.A.10 A, Página: 1724, la cual a la letra dice:

“FIRMA FACSIMILAR, DEBE DECLARARSE LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA POR PARTE DEL FUNCIONARIO EMISOR DEL OFICIO DONDE SE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL AL CONTRIBUYENTE, DA LUGAR A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV, Y 239, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN VIRTUD DE QUE AL CARECER DE FIRMA EMPADADA DE PUÑO Y LETRA DE LA AUTORIDAD QUE REQUIERE EL PAGO, ES CLARO QUE SE VIOLENTA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38 DEL MISMO CÓDIGO TRIBUTARIO, EN RELACION CON EL NUMERAL 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES ES UN ACTO DE MOLESTIA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN DICHO NUMERAL...”

No es óbice para considerar lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 195/2007, pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que el criterio contenido en dicha tesis jurisprudencial no refleja el verdadero sentido de lo resuelto en la contradicción de tesis 192/2007, y por tanto resolvió que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia la ya citada tesis 2a./J. 13/2012 (10a.)

Para arribar a la anterior conclusión conviene precisar lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 5/2011 en la que determinó modificar la jurisprudencia 171171, que en su rubro y texto disponía:

“FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA AFIRME QUE ESTE LA CONTIENE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos administrativos, para su validez, deben contener la firma autógrafa de la autoridad competente que los emite. Por otro lado, es principio de derecho que "quien afirma está obligado a probar"; sin embargo, no toda afirmación obliga a quien la hace a demostrarla, ya que para ello es requisito que se trate de afirmaciones sobre hechos propios. Ahora bien, si la actora en su demanda de nulidad plantea que el acto impugnado no cumple con el requisito de legalidad que exigen los artículos 38, fracción V, del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no contener firma autógrafa, esta manifestación no es apta para estimar que es a ella a quien corresponde la carga de la prueba, ya que no se trata de una afirmación sobre hechos propios, sino únicamente del señalamiento de un vicio que podría invalidar al acto impugnado. En cambio, si la autoridad que emitió la resolución impugnada en su contestación a la demanda manifiesta que el acto cumple con el requisito de legalidad por calzar firma autógrafa, ésta sí constituye



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGÜASCALIENTES

una afirmación sobre hechos propios que la obliga a demostrar, a través de la prueba pericial grafoscópica, la legalidad del acto administrativo, en aquellos casos en que no sea posible apreciar a simple vista si la firma que calza el documento es autógrafa.”

Para modificar el anterior criterio la Segunda Sala del Máximo Tribunal consideró que en las consideraciones de la ejecutoria emitida en los autos de la contradicción de tesis 192/2007, se determinó que cuando la parte actora en un juicio de nulidad aduzca que el acto administrativo impugnado carece de firma autógrafa de la autoridad que lo emitió, esta manifestación no es apta para estimar que es a ella a quien le corresponde la carga de la prueba, ya que no se trata de una afirmación sobre hechos propios. Sin embargo, si la autoridad que emitió el acto reclamado, en su contestación a la demanda, manifiesta que éste sí calza firma autógrafa, dicha manifestación constituye una afirmación sobre hechos propios que la obliga a demostrarlos.

Asimismo destacó que, toda vez que el punto controvertido por las partes en el juicio de nulidad consiste en determinar si la firma contenida en el acto administrativo reclamado es autógrafa o no, el juzgador no está en condiciones de apreciar a simple vista la firma que calza el documento para determinar tal circunstancia, al no poseer los conocimientos técnicos especializados para ello, dado que la comprobación de ese hecho requiere de la prueba pericial grafoscópica que ofrezca la demandada, caso en el cual la parte actora también podrá nombrar a su perito y, de existir discrepancia entre uno y otro, corresponderá al magistrado instructor nombrar al perito tercero en discordia.

Que pese a lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J. 195/2007, que derivó de la contradicción de tesis 192/2007, en estudio, se señaló que si la autoridad que emitió la resolución impugnada, en su contestación a la ampliación de demanda, manifiesta que el acto cumple con el requisito de legalidad por calzar firma autógrafa, ésta

constituye una afirmación sobre hechos propios que la obliga a demostrar, a través de la prueba pericial grafoscópica, la legalidad del acto administrativo, en aquellos casos en que no sea posible apreciar a simple vista si la firma que calza el documento es autógrafa.

Es decir, del texto de la jurisprudencia 2a./J. 195/2007 pareciera que para determinar la cuestión debatida, consistente en determinar si la firma contenida en el acto administrativo cuya nulidad se demanda es autógrafa o no, el juzgador está en posibilidad de decidir si él a simple vista puede determinar tal circunstancia, o bien, si la comprobación de ese hecho requiere de la prueba pericial grafoscópica.

Con motivo de lo anterior concluyó que el criterio contenido en la tesis jurisprudencial 2a./J. 195/2007 no refleja el verdadero sentido de lo resuelto en la contradicción de tesis 192/2007 y por tanto resolvió que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia, la publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro VI, marzo de 2012, Tomo I, con el número de tesis 2a./J. 13/2012 (10a.).

Tampoco es obstáculo para lo anterior, el hecho de que la autoridad al contestar la demanda, anexe diversa determinación del impuesto a la propiedad raíz para la cuenta predial y ejercicio impugnado, e intente apoyar su contestación en tal determinación, pues al hacerlo, intenta mejorar la resolución impugnada, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que textualmente establece:

“ARTICULO 37.- En la contestación de la demanda, no podrá cambiarse ni la motivación ni los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

En la contestación de la demanda o hasta antes de los alegatos la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada.

En el caso de resolución negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que se apoye la misma.”

QUINTO.- Al ser **FUNDADO** el concepto de nulidad,



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGUASCALIENTES

en términos de lo analizado en el considerando que antecede, se concreta la causal de anulación establecida por el artículo 61, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, por lo que, con fundamento en el artículo 62, fracción II, de la citada ley, se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la determinación y requerimiento de pago del impuesto a la Propiedad Raíz para el ejercicio fiscal 2018, relativo a la cuenta predial *******, emitido el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, por la Jefa del Departamento de Impuestos Predial e ISABI, de la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes bajo el número

Por las razones que se informan en el presente fallo y con fundamento en los artículos 59, 60, 61, fracción II y 62, fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Es procedente la acción ejercida por la actora.

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la determinación y requerimiento de pago del impuesto a la Propiedad Raíz para el ejercicio fiscal 2018, relativo a la cuenta predial *******, emitido el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, por la Jefa del Departamento de Impuestos Predial e ISABI, de la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, bajo el número

TERCERO.- Notifíquese personalmente.

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los Magistrados Enrique Franco Muñoz, Rigoberto Alonso Delgado y Alfonso Román Quiroz, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman en unión de la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Juana Laura de Luna Lomelí, que autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos de veintiocho de enero de dos mil diecinueve.- Conste.

L'EFM/mfl

La C. Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes:

CERTIFICA:

Que la presente impresión contenida en diez páginas



PODER JUDICIAL

ESTADO DE AGÜASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 1341/2018

Cópias útiles de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 1341/2018, concuerda fielmente con la sentencia original que obra en dicho expediente y que se encuentra firmada por los Magistrados que integran éste órgano jurisdiccional así como por la suscrita, las que se certifican a fin de notificar a las partes, a los *veinticinco días del mes de enero de dos mil diecinueve*.- Doy fe.-

LIC. JUANA LAURA DE LUNA LOMELÍ
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL